

\*\*\* English below! \*\*\*

# EL ROBLE VIGOROSO

desde San Marcos, Guatemala



*Comisión Pastoral Paz y Ecología — COPAE*

No. 13, 20 de noviembre de 2007

Con este boletín pretendemos comunicarle los acontecimientos y noticias relevantes sobre la minería de metales a cielo abierto en Guatemala y la resistencia de las comunidades en contra de ella. Este boletín se llama el Roble Vigoroso, por la fuerza y el poder de resistencia que tiene este árbol. Cualquier comentario será bienvenido.

**Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE)**

correo-e: [copae.sanmarcos@gmail.com](mailto:copae.sanmarcos@gmail.com)

<http://www.resistencia-mineria.org>

Si no quiere recibir estos correos, envíe un correo-e indicando que quiere describirse.

El informador **no tiene derechos reservados**, entonces nos puede ayudar en esta campaña informativa reenviando este boletín a sus propias direcciones o imprimiéndolo y distribuyéndolo lo más ampliamente posible.

Este informador tiene los siguientes artículos:

1. Presentación de los nuevos Lineamientos de la Política Minera del Estado
2. Artículo de opinión sobre el juicio penal entre Montana Exploradora y campesinos marquenses

## **1. Presentación de los nuevos Lineamientos de la Política Minera del Estado**

El pasado 25 de octubre el Ministerio de Energía y Minas (MEM) presentó un documento titulado "**Lineamientos de la Política Minera 2008-2015**" en que se está planteando el futuro para la actividad minera en Guatemala. Tal como se menciona en su introducción, los Lineamientos sirven como "instrumento orientador de las principales acciones que tanto el sector público como la sociedad civil, el sector privado y la comunidad internacional debemos impulsar para lograr que la actividad minera se desarrolle de manera sostenible en el largo plazo y atendiendo a los objetivos medioambientales y comunitarios que la misma exige."

El documento de los Lineamientos inicia con un análisis del crecimiento del sector minero en Guatemala, especialmente la minería de metales, y el volumen que éste pueda tener en el futuro. Cabe señalar los siguientes datos:

- En Guatemala existen actualmente alrededor de 370 licencias mineras otorgadas, y cerca de 300 licencias en trámite;
- Con solamente una mina de metales en explotación, el valor de la producción minera metálica corresponde al 84% del total de la producción minera;
- Guatemala ahora tiene una balanza comercial minera positiva, debido al gran valor económico de la exportación del oro y plata proveniente de la mina Marlin en San Marcos;

- El renovado interés de inversionistas extranjeros en la explotación de metales; destaca la puesta en marcha de varios proyectos mineros de oro y plata (sobre todo en el altiplano occidental y el oriente) y de níquel (en los departamentos de Izabal y Alta Verapaz, principalmente).

Posteriormente a este análisis, el MEM identifica los diferentes Lineamientos de la Política Minera para asegurar que la cantidad de operaciones mineras en el país puede crecer durante los siguientes años y que esta actividad se realiza cumpliendo las normas y regulaciones, dejando un beneficio considerable para la sociedad y las comunidades implicadas. Para alcanzar este objetivo, el MEM plantea las siguientes tareas a llevarse a cabo dentro del periodo 2008-2015:

- Modernizar el marco jurídico aplicable a la minería (incluyendo la aprobación de una nueva Ley de Minería) y fortalecer el rol regulatorio del gobierno en los temas de derechos humanos y la conservación de los recursos naturales;
- Desarrollar una política de diálogo y concertación con las comunidades implicadas durante el otorgamiento de las licencias, de acuerdo con los principios del *Convenio 169* de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), firmado por Guatemala en 1996;
- Asegurar que los beneficios serán invertidos especialmente en las comunidades donde se realiza la explotación minera;
- Aumentar la coordinación entre el MEM, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y otros ministerios para asegurar la protección del medio ambiente y el cumplimiento de los compromisos alrededor de la salud y seguridad de la población, la clausura de la mina y las fianzas a pagar.

Al concluir el documento de los Lineamientos, el MEM agradece a todos los actores que participaron en la formulación de esta Política Minera, y en especial a los signatarios del documento final de la Comisión de Alto Nivel (CAN) en 2005, presidida por Monseñor Álvaro Ramazzini, cuyas recomendaciones para la elaboración de un anteproyecto de una nueva Ley de Minería supuestamente fueron tomadas en cuenta.

Como COPAE, nos parece sumamente extraño que el MEM, por un lado, reconoce la necesidad de asegurar que la población guatemalteca es la primera en aprovechar de la actividad minera, mientras este Ministerio, por otro lado, sigue otorgando licencias mineras a grandes transnacionales mineros sin consultar a las comunidades. El documento de los Lineamientos pone en evidencia las deficiencias de los Ministerios responsables por la explotación técnico y racional de los recursos, al igual que su negligencia de consultar a los pueblos indígenas que viven las áreas de interés minero, lo cual nos hace concluir que el MEM debería suspender el otorgamiento de más licencias mineras hasta que se hayan implementado las tareas mencionadas arriba.

Igualmente, nos preocupa que muchos aspectos de los nuevos Lineamientos hayan quedado sin mayor especificación. No se ha quedado claro, por ejemplo, como el Ministerio pretende invertir los beneficios de las regalías para que este dinero realmente pueda provocar un desarrollo en las comunidades cercanas a los proyectos mineros, en lugar de ajustar el fondo común o desaparecer en los bolsillos de funcionarios corruptos. De la misma manera, no se explica en que forma los Ministerios van mejorar la coordinación entre ellos, ni se especifica los fondos que van a poder utilizar para hacer un buen trabajo en el campo social e ambiental.

Por otro lado, Monseñor Ramazzini, en calidad de Presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala y por haber presidido la CAN, ha mostrado su decepción y preocupación por los Lineamientos tal como fueron presentados por el MEM y ha emitido una carta con una serie de observaciones, recomendaciones y peticiones sobre dichos lineamientos. En la carta enviada al Presidente Óscar Berger y a la Ministra de

Energía y Minas Carmen Urizar el día 13 de noviembre, él comenta al respecto: “El informe de los Lineamientos de la Política Minera sobre el periodo 2008-2015 reconoce la ratificación de Guatemala del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y, por lo tanto, menciona la necesidad de llevar a cabo un proceso de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas del país sobre las actividades mineras que el mismo Ministerio de Energía y Minas pretende impulsar. Sin embargo, los Lineamientos no indican en qué momento se prevé realizar esta consulta, ni toma en cuenta las formas consuetudinarias de los pueblos indígenas de organizar dicha consulta. Durante mi participación en la Comisión de Alto Nivel siempre reiteraré la importancia de consultar a las comunidades sobre las actividades mineras ANTES de impulsar cualquier proyecto minero, tal como dicta el espíritu y letra del Convenio 169 de la OIT.”

Otra preocupación de Monseñor Ramazzini durante su participación en el CAN siempre fue el uso y acceso al agua de la empresa minera y la necesidad de asegurar que este bien esté en favor de la población: “Considero de suma importancia la protección de los recursos ambientales, incluyendo el agua, para que las futuras generaciones no vean perjudicadas sus posibilidades de hacer uso de manera responsable de estos recursos. Sin embargo, la visión al futuro de la política minera no retoma la protección de los recursos naturales como un elemento central, tal como lo habíamos insistido durante las reuniones de la CAN, comprometiendo de esta manera el derecho humano al agua y a la alimentación.” Siguiendo el tema de la protección ambiental, Monseñor Ramazzini critica la falta de hacer referencia al proceso de aprobación (o no-aprobación) de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), elemento central para una explotación racional y responsable de los recursos naturales no-renovables, y la necesaria revisión de este proceso: “Al no incluir el tema de los EIA, el MEM ignora las preocupaciones que salieron al respecto durante las reuniones de la CAN: ¿Cómo asegurar la absoluta independencia de la entidad técnica encargada de llevar a cabo los EIA?, ¿Cómo asegurar una mayor participación de las comunidades posiblemente afectadas durante la elaboración y revisión del EIA?, ¿Cómo asegurar que se tome en cuenta una posible crítica u oposición al EIA presentada por las comunidades y/o actores de la sociedad civil?, ¿Cómo asegurar un proceso transparente de la aprobación de un EIA?”

Queda claro que los Lineamientos, en su actual forma, no es una política seria ni mucho menos adecuada para nuestro país, pues siguen planteando el enfoque de explotación de recursos naturales y siguen anteponiendo los intereses foráneos a los verdaderos intereses nacionales, que finalmente son la vida, los derechos humanos y la dignidad y el bienestar de las personas. Consideramos que se tiene que precisar y concretar el contenido de las Lineamientos, especialmente en el tema de los recursos naturales y en el tema de las consultas a las poblaciones en áreas de interés minero, antes de seguir impulsando la minería.

Como COPAE vemos una necesidad ahora más urgente que el de impulsar la realización de estudios técnicos que tomen en cuenta las vocaciones de las diferentes regiones del país, de acuerdo con las perspectivas de la misma población. Eso incluye tomar en cuenta las posibilidades que las áreas puedan desarrollarse a través de un crecimiento en el turismo, a través del incremento de una producción agrícola sostenible o través de impulsar la pequeña y mediana industria. Solamente la elaboración de políticas que tengan en cuenta las necesidades reales de la población guatemalteca puede provocar un verdadero desarrollo a corto y largo plazo.

Para bajar el documento entero de los “Lineamientos de la Política Minera 2008-2015”, diríjase a la siguiente página: <http://www.resistencia-mineria.org/espanol/files/lineamientos-mem.pdf>

La carta enviada por Ramazzini al Presidente Berger y la Ministra Urizar está disponible a través: <http://www.resistencia-mineria.org/espanol/files/carta-ramazzini.pdf>

## **2. Artículo de opinión sobre el juicio penal entre Montana Exploradora y campesinos marquenses**

Actualmente se está llevando a cabo en San Marcos, cabecera del departamento con el mismo nombre, el juicio penal que mantiene la empresa transnacional Montana Exploradora de Guatemala en contra de siete campesinos indígenas de aldeas cercanas a la mina Marlin (vea “el Roble Vigoroso #12”). En la espera del veredicto final, previsto para el final de noviembre, le presentamos un artículo de la periodista Irmalicia Velásquez Nimatuj, publicado en el diario guatemalteco “*El Periódico*” el día 12 de noviembre: (<http://www.elperiodico.com.gt/es/20071112/opinion/45602/>)

---

### **Ixtahuacán y Montana**

Tratan de silenciar a cientos de indígenas.

Hoy a las 9:00 de la mañana se inicia un debate histórico en la sede del Tribunal de Sentencia de San Marcos. En este juicio, siete hombres indígenas del municipio de San Miguel Ixtahuacán son acusados por la empresa Montana Exploradora de Guatemala, subsidiaria de la empresa Glamis Gold Ltd., de incitación a delinquir, amenazar y agredir al jefe de seguridad de Montana, el 10 de enero de 2007, en el caserío San José Nueva Esperanza, cerca a las instalaciones de la mina Marlin, que desde el 2005 extrae oro en ese lugar.

Lo que está detrás de la acusación no son las agresiones al jefe de seguridad, sino tratar de silenciar a través del sistema judicial a cientos de hombres y mujeres indígenas, la mayoría analfabetas, que fueron astutamente persuadidos por representantes de Montana para vender sus tierras por unos quetzales. Ahora cinco comunidades se han visto despojadas y han empezado a enfrentar la destrucción de cerros y montañas, la pérdida de la flora y la fauna, la contaminación del aire, la destrucción de la parte alta de la cuenca del río Cuilco, el cierre de caminos, el desmoronamiento lento de las casas de quienes se negaron a vender y a marcharse.

Estas comunidades están viviendo el desplazamiento en sus propios territorios, provocado por la instalación y operación de una mina de oro. Por eso, se han levantado y piden una revisión del deshonesto negocio, que está acabando con sus recursos, pero sobre todo con la vida.

El 9 de enero de 2007 los representantes de Montana recibieron en la mina Marlin a la comitiva de los campesinos, los escucharon, y al día siguiente les dijeron que sus demandas no procedían. Cuando retornaban a sus comunidades fueron atacados con piedras y armas de fuego por miembros de la seguridad de la mina, e inmediatamente acusados de un delito que no cometieron, para amedrentarlos y poner precedentes ante otras comunidades de San Marcos o Huehuetenango que han realizado consultas municipales y han dicho “no” a la minería de cielo abierto, que se lleva los minerales dejando un miserable 0.5 por ciento de las ganancias a las municipalidades.

El equipo legal de Montana propuso desistir si los siete campesinos se declaraban culpables, pedían disculpas públicas al jefe de seguridad y firmaban un acta que restringía su libertad de manifestación.

Con dignidad dijeron “no”, y ahora están poniendo a prueba la imparcialidad del sistema de justicia.

-----

# THE ROBUST OAK

from San Marcos, Guatemala



*Pastoral Commission Peace and Ecology — COPAE*

No. 13, November 20<sup>th</sup> de 2007

This bulletin intends to communicate the available information regarding open-pit mining activities in Guatemala, as well as the resistance of local communities against it. The bulletin is called “The Robust Oak” because, for the communities of San Marcos, this tree represents strength and great power to resist. Any comments or suggestions are appreciated.

**Pastoral Commission for Peace and Ecology (COPAE)** e-mail: [copae.sanmarcos@gmail.com](mailto:copae.sanmarcos@gmail.com)

<http://www.resistance-mining.org>

If you don't want to receive these e-mails, please send a message saying you want to unsubscribe.  
This bulletin **doesn't contain copywrite**, so please don't hesitate to forward it to your personal contacts, or by distributing printed copies.

This report contains the following articles:

1. Presentation of the government's Mining Policy Guidelines
2. Opinion article about the court case between Montana Exploradora and San Marcos *campesinos*

## **1. Presentation of the government's Mining Policy Guidelines**

On the 25<sup>th</sup> of October, the Ministry of Energy and Mines (MEM) presented the document “***Mining Policy Guidelines 2008-2015***” in which it designs the future for mining exploitation in Guatemala. As mentioned in the document's introduction, the Guidelines serve as “a manual of the main activities that need to be carried out by governmental organisations, civil society, the private sector and the international community in order to make sure that mining activities are taking place in a sustainable way, as well as complying with all environmental and social objectives as required in the document.”

The Guidelines start off with an analysis about the growing importance of the mining sector in Guatemala, most notably metal mining, and the overall capacity it might achieve in the future. It is worthwhile mentioning the following figures:

- There are currently around 370 approved mining licences in Guatemala, as well as approximately 300 licences waiting to be approved;
- Although there is currently only one metal mine in operation, the production value of the metallic mining sector represents 84% of the value of the entire mining production;
- Guatemala now has a positive mining trade balance, which is principally the result of the huge economic value of the exportation of gold and silver from the Marlin mine in San Marcos;
- There is a renewed interest by foreign investors in the exploitation of metals; throughout the last years various new gold and silver mining projects have been surging (mostly in the Western highlands and in the East) as well as nickel projects (mainly in the Izabal and Alta Verapaz departments).

Following this analysis, the MEM presents the Mining Policy Guidelines that should guarantee the expansion of the number of mining operations in the country within the coming years, as well as making sure that the mining sector respects all standards and regulations, and that it generates considerable benefits for the Guatemalan society on the whole, and in particular for the communities involved. In order to accomplish this, the MEM suggests carrying out the following tasks within the period 2008-2015:

- Modernizing the legal framework for mining activities (including the approval a new Mining Law) and strengthening the government's regulatory capacities regarding human rights and the conservation of natural resources;
- Developing procedures to engage in dialogues and consultations with the involved communities, conform the *Convention 169* of the International Labour Organisation (ILO), ratified by Guatemala in 1996;
- Assure that the profits generated by the mining activities will be invested principally in the communities where mining exploitation takes place;
- Increasing the coordination between the MEM, the Ministry of Environment and Natural Resources (MARN) and other ministries, in order to assure the protection of the environment and to check the implementation of the mining companies' agreements regarding the health and security of nearby populations, the shutdown of the mine and the payment of risk deposits.

At the end of the Guidelines, the MEM thanks all the people that participated in the elaboration of this Mining Policy, and in particular the signatories of the final document of the High Level Commission (CAN) in 2005, presided by Monsignor Ramazzini of San Marcos, whose recommendations for the creation of a new Mining Law were supposedly taken into account.

At COPAE we think it is rather strange that the MEM, on the one hand, recognises its obligation to assure that the Guatemalan population should be the first to benefit from the mining activities, whereas the Ministry, on the other hand, continues to approve mining licences to large transnational mining companies without consulting the communities. The Guidelines demonstrate the deficiencies of the Ministries responsible for the technical and rational exploitation of Guatemala's natural resources, as well as evidencing their negligence to carry out consultations of the indigenous people that live in areas with mining interests. All this leads us to the conclusion that the MEM should postpone the approval of more mining licences until the above-mentioned tasks have been implemented.

Likewise, we are upset that many characteristics of the new Guidelines have not been adequately specified. It remains rather unclear, for example, how the Ministry is planning to invest the mining royalties in such a way that this money will provoke community development in areas close to a mine, instead of ending up in the common fund or disappearing into the pockets of corrupt officials? The document neither explains how the Ministries will improve their internal coordination, nor does it specify the amount of funds these Ministries will receive in order for them to improve their capacities in the social and environmental sphere.

As the President of Guatemala's Episcopal Conference and as the person that presided the CAN in 2005, Monsignor Ramazzini manifested his disappointment and worries about the Guidelines, and subsequently sent out a letter with a series of observations, recommendations and petitions regarding this document. In the letter, which was sent out to President Óscar Berger and the Minister of Energy and Mines, Carmen Urizar, on the 13<sup>th</sup> of November, he highlights the following: "The Mining Policy Guidelines for the period 2008-2015 recognise the ratification by Guatemala of the ILO Convention 169 and they therefore mention the obligation to initiate a process of free, prior and informed consent of the indigenous people about the mining activities that the Ministry of Energy and Mines is currently promoting. However, the Guidelines do

neither specify at what moment this consultation is supposed to be realised, nor does it take into account the indigenous peoples' customary ways of organising a consultation. During my participation in the High Level Commission I always drew attention to the importance of consulting the indigenous communities BEFORE approving mining projects, consistent with the spirit and the exact wording of the Convention 169.”

Throughout his participation in the CAN, Monsignor Ramazzini repeatedly questioned the mining company's enormous need for water, and the necessity to assure that this resource would also be available to the local population: “For me the protection of the natural resources, including water, needs to be an essential element in the Mining Policy, because we need to make sure that future generations are also able to exploit these resources in a responsible way. Nevertheless, the mining policy's visions for the future do not include the protection of the natural resources, as we repeatedly insisted during the meetings of the CAN, and they thereby jeopardise the human right to food and water.”

Continuing on the subject of environmental protection, Monsignor Ramazzini criticised the Guidelines for not tackling the obsolete process of the approval (or disapproval) of Environmental Impact Assessments (EIA), a central element for the rational and responsible exploitation of the national resources: “By excluding the issue of the EIA's, the MEM ignores the following preoccupations that emerged during the meetings of the CAN: How do we assure the absolute independence of the institutions in charge of elaborating the EIA's? How can we guarantee an increased participation of the local population, likely to be affected by mining operations, throughout the entire process of the elaboration and revision of the EIA's? How can we guarantee a procedure that takes into account the possible criticism or disapproval of an EIA presented by communities and/or civil society organisations? And how can we assure that the EIA's are approved in a transparent manner?”

It should be clear that the Guidelines, in its actual form, are neither a serious nor an acceptable policy framework for our country, as they continue to focus on the exploitation of the natural resources and give preference to foreign interests instead of prevailing national interests, such as life, human rights, dignity and the wellbeing of the population. Rather than continuing to promote mining in Guatemala, the MEM needs to identify the specific contents of the Guidelines, above all on the topic of natural resources and the consultation of people in areas with mining interests.

At COPAE we are more and more aware of urgency to promote technical studies that identify the vocation of the different regions of the country, in accordance with perspective of the local population. This includes taking into account the regions' possibilities to generate economic development through an increase in tourism, through the support of sustainable agriculture, or through the promotion of small and medium-sized industry. The only way to generate development on the short and on the long term is by elaborating policies which respond to the real necessities of the Guatemalan population.

The entire document of the “Mining Policy Guidelines 2008-2015” is available at the following address: <http://www.resistencia-mineria.org/espanol/files/lineamientos-mem.pdf> (in Spanish)

The letter sent by Monsignor Ramazzini to President Berger and Minister Urizar can be downloaded at: <http://www.resistencia-mineria.org/espanol/files/carta-ramazzini.pdf> (in Spanish)

## 2. Opinion article about the court case between Montana Exploradora and San Marcos *campesinos*

In the city of San Marcos, capital of the department with the same name, the court case pressed by *Montana Exploradora de Guatemala* against seven indigenous farmers from villages close to the Marlin mine is currently taking place (See "The Robust Oak #12"). Awaiting the final verdict, due at the end of November, we now present the following article from Guatemalan journalist Irmalicia Velásquez Nimatuj, published in the daily newspaper "El Periódico" on the 12<sup>th</sup> of November:

(<http://www.elperiodico.com.gt/es/20071112/opinion/45602/>)

----

### Ixtahuacán and Montana

The intention to silence hundreds of indigenous people

A historical debate started today at 9 o' clock in the court of the San Marcos Tribunal. In this court case, seven indigenous men from the municipality of San Miguel Ixtahuacán are being accused by the company Montana Exploradora de Guatemala of the instigation of crimes and of the intimidation and assault of the head of Montana's security; all this taken place on the 10<sup>th</sup> of January 2007 in the village of San José Nueva Esperanza, close to the installations of the Marlin mine, which has been extracting gold from San Marcos since 2005.

Behind this accusation is not the aggression against the head of security, but instead the company's aim to silence, through Guatemala's judicial system, hundreds mostly illiterate indigenous men and women who were cleverly persuaded by representatives of Montana to sell their lands for a few Quetzals. The people of five affected communities have now started to confront the destruction of hills and mountains, the loss of flora and fauna, the contamination of the air, the destruction of the upper part of the Cuilco river basin, the closure of community roads and the slow demolition of houses of people that refused to sell their land and leave their place.

The people of these communities have become refugees within their own territory, a situation produced by the arrival of a goldmine. And that's why these people are standing up and demanding a revision of this deceitful business that is exhausting their resources, but above all, their lives.

On the 9<sup>th</sup> of January, a committee of *campesinos* visited the Marlin where they told the representatives of Montana about their grievances. The next day, however, they were told that their requirements would not be taken into consideration. Upon returning to their communities they were attacked with stones and firearms by members of the mine's security, and immediately accused for crimes they did not commit. The main reasons behind these accusations are to intimidate the people and to set a precedent for the other communities in San Marcos and Huehuetenango that realised municipal consultations and said "no" to open-pit mining, activity that removes a large quantity of minerals and leaves a miserable 0.5 percent of the benefits behind for the municipalities.

Montana's legal team proposed to withdraw the accusation if the seven *campesinos* would plead guilty, would make a public apology to the head of security, and would sign a document restraining their freedom to demonstrate.

With self-respect these people said "no", and they are currently putting the objectivity of our judicial system to the test.